

CRONICA DEL MES

Marzo

En el mes de marzo se cumplieron algunos aniversarios importantes. Por un lado, el séptimo aniversario de dos de las "reformas estructurales" principales implementadas en 1980: la reforma agraria (5 de marzo) y la nacionalización de la banca (7 de marzo). Por otro lado, el séptimo aniversario del asesinato de Mons. Romero (24 de marzo). Al cabo de 7 años de estos acontecimientos, el desarrollo del proceso político salvadoreño durante el mes de marzo no ofreció indicios de que dichas reformas estructurales hubiesen revertido en medida significativa la injusticia estructural prevaleciente en aquella coyuntura, o de que la polarización social y la violencia política que condujeron al martirio de Mons. Romero hubiesen sido superadas por el "proceso de democratización."

En el ámbito económico, el gobierno permaneció atrapado en la contradicción de incentivar, por un lado, al sector privado como pivote principal de la reactivación, sin retractarse formalmente, por otro lado, del proceso reformista iniciado en 1980. En la línea de lo primero se ubica el convenio de donación de 225 millones de colones, firmado el 12 por el gobierno salvadoreño y la AID, para apoyar el financiamiento del sector privado de la zona oriental; así como el anuncio del Banco Central de Reserva (BCR) sobre la apertura de nuevas líneas de crédito para la cosecha cafetalera 1987-1988. En la línea de lo segundo, destacó sobre todo la reforma que, en la sesión plenaria del 26 de marzo, introdujeron los 33 diputados demócrata cristianos a la ley de creación del INCAFE (decreto 75), declarando como estanco a favor del Estado la exportación de café: "En consecuencia, queda prohibido el curso y venta libre de dicha mercancía por particulares, quedando el Estado como el

único autorizado para exportar café producido en el país y para realizar su comercialización en el exterior."

Como en los meses anteriores, el sector privado estimó insuficientes los incentivos concedidos y reiteró sus exigencias de que la política económica gubernamental diese un "giro de 180 grados." El 12, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) reafirmó "su total desaprobación al régimen económico, fiscal y administrativo a que nos está sometiendo el gobierno, y su rechazo a todas las medidas que en una u otra forma están contribuyendo a la estatización de la economía;" mientras que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) formuló dos condiciones mínimas que los sectores empresariales requerían para invertir: "expresión pública del gobierno de su absoluto respeto a los derechos derivados del principio de la propiedad privada; y la liberación del comercio del café, a efecto de que comercializadores independientes puedan comprar café internamente y venderlo al exterior."

Mientras el gobierno y la empresa privada intercambiaban frases fuertes, la crisis económica continuó agudizándose. Adicionalmente a los factores internos de orden socio-político, el desplome de los precios internacionales del café, según lo anunció el ministro de hacienda, representa una reducción de 700 millones de colones en los ingresos por exportaciones del grano. Internamente, la crisis agrícola forzó al Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) a anunciar el 18 de marzo un aumento en el precio oficial del maíz, arroz y frijol, aumento que el gerente del IRA justificó como medida programada ya en el plan de estabilización y reactivación económica implementado en enero de

1986. Al mismo tiempo, el IRA anunció que el precio de garantía para los productores de granos básicos permanecería al nivel establecido en la cosecha anterior. Con ello se lograría, según el funcionario, "regular los precios de los granos básicos, frenar la especulación y evitar la quiebra del IRA por estar pagando precios de garantía mucho más altos que los de venta al expendedor."

Las medidas no pudieron menos que acrecentar las protestas del movimiento laboral organizado, particularmente del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios (SITAS) y de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), quienes coincidieron en señalar que el aumento de precios no tenía razón de ser en tanto el IRA continuaba pagando el mismo precio de garantía a los productores y, además, no les compraba la totalidad de las cosechas. En el mismo marco, la UNTS manifestó que el incremento de precios anunciado por el IRA formaba parte del esquema gubernamental de "economía para la guerra" e insinuó que la medida podría haber sido implementada para recuperar parcialmente "a costa del sacrificio del pueblo, los 120 millones de colones que la oligarquía no pagó de impuestos de guerra y reponer así el déficit fiscal."

Con todo, el accionar reivindicativo laboral mantuvo en general un perfil bajo, lo cual hizo resaltar, por contraste, el primer aniversario de fundación de la UNOC, que esta organización celebró el 14 de marzo con un "Foro por la paz y la libertad." El foro, tenido en el Hotel Presidente, contó con la asistencia de unos mil delegados procedentes de diversas zonas del país. Como ponentes, participaron el secretario general del PCN, Hugo Carrillo, y el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, quienes expusieron "El papel de los partidos políticos en el proceso democrático;" así como el rector de la UCA, P. Ignacio Ellacuría, y el ministro de planificación, Fidel Chávez Mena, quienes disertaron sobre el "Análisis socio-económico de la realidad nacional y opciones para su solución."

En el discurso de inauguración del evento, el dirigente de la UNOC, Samuel Maldonado, expresó que "el primer problema que debemos encarar es el de la guerra, pues su finalización es indispensable para superar los problemas económicos... lo cual no sólo es competencia del gobierno y de los rebeldes en armas, sino de la participación incondicionada de los sectores que representan a todas las fuerzas sociales del país." En sus líneas fundamentales, el grueso de las ponencias coincidió en que la profundización de la guerra constituía un obstáculo fundamental para la recuperación socio-económica

del país, y en que sin la finalización del conflicto no se darían las condiciones mínimas para la satisfacción de las necesidades vitales de las mayorías populares. Hugo Carrillo manifestó al respecto que la pacificación del país constituía "la gran tarea prioritaria de los salvadoreños." El P. Ellacuría indicó que la solución de los problemas fundamentales del país debe plantearse en función de "las mayorías populares, que son más o menos el 90 por ciento del país," y aprovechó la ocasión para precisar sus ideas sobre la "tercera fuerza," subrayando que ésta "no es el término medio entre la extrema derecha y la extrema izquierda ni tampoco es una fuerza que quiere el poder. Por eso el puesto de las organizaciones populares en cuanto fuerza social está con el pueblo, no con el poder, porque a éste le es difícil estar con el pueblo." Por su parte, Chávez Mena defendió que las "reformas estructurales" como la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la reforma agraria y la reciente reforma tributaria constituían una respuesta del gobierno a la "crisis estructural" que atravesaba el país; y puntualizó que el fomento de los movimientos cooperativos y organizaciones sindicales ofrecía "vías de solución para ir rompiendo el cierre de las válvulas de expresión social y política."

En contraste con el aniversario más bien fastuoso de la UNOC, la lucha reivindicativa de la UNTS recibió un nuevo revés el 30 de marzo, cuando una fracción de la Asociación Nacional Campesina (ANC) anunció su retiro de la Unión Nacional Campesina (UNC) y de la propia UNTS. La fracción de la ANC adujo que "los dirigentes de la UNC y de la UNTS han violado nuestra unidad, no han respetado los lineamientos de nuestra organización... forzándonos a llevar nuestra asociación hacia intereses muy lejanos para los que fue creada." En una primera reacción al anuncio, los dirigentes de la UNTS expresaron que desconocían los motivos del retiro de la fracción de la ANC. En un segundo momento, el ex-secretario de ANDES, Julio César Portillo, aseguró que esa postura era "fruto del trabajo del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), financiado por Estados Unidos, que tiene como finalidad dividir el movimiento de los trabajadores en el país."

El séptimo aniversario del asesinato de Monseñor Romero brindó ocasión para que el movimiento popular expresara su descontento por la situación socio-económica del país más allá de las demandas puramente economicistas. Obreros, campesinos y cooperativistas agrupados en la UNTS, así como madres y familiares de pre-

sos, desaparecidos y asesinados políticos, miembros de organismos humanitarios y comunidades de base, religiosos nacionales y extranjeros, realizaron el día 24 una marcha conmemorativa, la cual se inició en tres puntos distintos de la capital (Parque Cuscatlán, Basílica del Sagrado Corazón y Paseo Independencia) y concluyó con una concentración frente a la Catedral Metropolitana. El evento no estuvo exento de un cierto despliegue de represión y violencia. Además de los retenes del ejército que desde el día anterior detuvieron varios buses con manifestantes que procedían del interior, regresándolos a sus lugares de origen, los cuerpos de seguridad golpearon y capturaron en diversos puntos de la capital a varios estudiantes y sindicalistas. La denuncia de las condiciones represivas aún prevalecientes en el país fue precisamente uno de los ejes principales de la conmemoración, junto a los señalamientos sobre la incapacidad del sistema de administración de justicia para esclarecer el asesinato de Monseñor.

También a nivel de las contradicciones entre el proyecto demócrata cristiano y las fuerzas políticas y económicas de la derecha, el desarrollo del proceso político salvadoreño durante el mes de marzo arrojó abundantes indicios de la extremada polarización de intereses prevaleciente en el país y de la facilidad con que la violencia física vuelve a aflorar tan pronto como la lucha ideológica supera un umbral mínimo.

Entre esos indicios se destacó la polémica verbal surgida entre el presidente Duarte y los dirigentes empresariales Víctor Steiner y José Antonio Rodríguez Porth, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria (CCIES), respectivamente, a raíz de una insinuación hecha por el presidente el 18, al inaugurar en el Hotel Camino Real un seminario sobre "Política nacional de producción." En esa ocasión Duarte dijo que ambos dirigentes estaban en contra de los intereses populares y en particular acusó a Rodríguez Porth de "mandar asesinar" a miles de salvadoreños cuando formó parte del directorio cívico-militar en 1950. Al día siguiente, Rodríguez Porth calificó de "irresponsables" las acusaciones y exigió a Duarte que explicitara "en forma pública el nombre y el número de las personas que según él mandé matar." El jefe de fracción de ARENA en la asamblea Armando Calderón Sol, manifestó incluso que la inmunidad de que Duarte gozaba como presidente de la república no lo eximía de ser juzgado por difamación.

Otro eje de confrontación lo siguió constituyendo la cuestión de la ley electoral, a medida que las negociaciones entre el PDC y el PCN

para corregir las reformas contenidas en el Decreto 564 avanzaban hacia un acuerdo, con notable disgusto de ARENA, cuyos diputados adversan cualquier arreglo con el PDC, ARENA espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 27 de febrero contra el Decreto 564. En la mañana del 18 de marzo, el presidente de la asamblea, Guillermo Guevara Lacayo (PDC) informó a la prensa que su partido había llegado virtualmente a un acuerdo con el PCN en relación al asunto de la ley electoral y al funcionamiento del Consejo Central de Elecciones (CCE), y anunció que la huelga legislativa mantenida por las fracciones de oposición posiblemente sería levantada en breve. En la madrugada del día siguiente, la residencia de Guevara Lacayo fue objeto de un ataque de relativa magnitud por parte de unos 8 sujetos armados de ametralladoras y fusiles de grueso calibre, así como de lanzacohetes RPG-2.

Aunque los atacantes dejaron un cartucho de RPG-2 con la leyenda "Muerte a la Democracia Cristiana. FMLN," el propio Guevara Lacayo indicó que, si bien no podía descartar que la acción hubiese sido hecha por la guerrilla, había "muchos datos por los que podría determinarse que el atentado fue cometido por grupos derechistas y no por la izquierda." En relación al cartucho abandonado, puntualizó que "éste no es el sistema de la guerrilla. Ellos se atribuyen los atentados a través de la radio clandestina o de comunicados, pero no con tarjetitas." Asimismo, Guevara informó que desde 1980 había sufrido por lo menos 8 atentados y en todos ellos, como en esa ocasión, el ataque físico había sido precedido de agresiones verbales de la derecha. La mayoría de atentados ocurrió en 1980, cuando, siendo fiscal general, intentó enjuiciar al mayor D'Aubuisson por su presunta participación en el asesinato de Monseñor Romero y otros crímenes.

En respuesta a las alusiones, D'Aubuisson manifestó su "rechazo y condena a todo tipo de violencia" e interpretó el ataque como un auto-atentado: "Me da la impresión de que es un auto-atentado para cambiar la opinión pública." Según el Mayor, ello formaría parte de "una campaña premeditada que además pretende desprestigiar a nuestro partido. Con las declaraciones de Guevara se pretende vincular a ARENA con la ultraderecha. ARENA no es de la ultraderecha. Somos conservadores, republicanos y nacionalistas. Somos de derecha pero estamos en el proceso democrático." Curiosamente, la hipótesis del autoatentado ganó cierta credibilidad también a los ojos del presidente del FDR, Guillermo Ungo, quien declaró a una emisora de

San Salvador que el ataque "bien pudo ser un autoatentado arreglado por el actual régimen para después acusar a quienes se oponen a sus políticas."

Al igual que en el campo político, la violencia cobró también en el terreno militar mayor intensidad. El FMLN incrementó las acciones de sabotaje a la economía y las emboscadas y hostigamiento a los patrullajes y operativos de rastreo impulsados por el ejército en diversos puntos del país. La Fuerza Armada, por su parte, dio continuación al operativo de contrainsurgencia "Héroes 13 de marzo de 1986," iniciado el mes anterior, así como a la Operación Fénix desarrollada en el área de Guazapa, y fortaleció su accionar en los departamentos de Chalatenango, San Vicente, San Miguel, Morazán y La Unión.

En este marco, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Adolfo Blandón, rindió el 2 de marzo un informe sobre los resultados y perspectivas del plan "Unidos para reconstruir" a un año de su implementación. Blandón resaltó como logro principal "el alto grado de confianza de la ciudadanía en la Fuerza Armada y su desaprobación a los grupos subversivos que están relegados al pillaje y vandalismo." Entre los logros más específicos, informó que dentro del plan se habían materializado 725 obras de beneficio público por un monto de 44 millones de colones y se tenía programada una inversión de otros 59 millones de colones en diversos proyectos de beneficio comunal. Por otro lado, indicó que el plan había permitido incrementar la defensa, la cual contaba ahora con 340 puestos que "reúnen a unos 39 mil salvadoreños para luchar contra esos grupos clandestinos."

En la misma línea, con ocasión de inaugurar obras comunales en el norte del departamento de San Salvador, el comandante de la Primera Brigada de Infantería, coronel Leopoldo Hernández, informó el 17 de marzo que en lo que iba de la Operación Fénix, el ejército y la guerrilla habían sufrido 746 bajas entre muertos y heridos. De ese total, la Fuerza Armada habría sufrido la mayor parte de las bajas, 535, de las cuales "31 fueron mortales, 94 heridos de bala y el resto producto de la explosión de minas." En contrapartida, según Hernández, "el FMLN sufrió 211 muertos, un número no determinado de heridos, perdió 284 fusiles, morteros, cañones, lanzacohetes, lanzagranadas, 801 minas, y le fueron destruidos 330 tatús, 83 campamentos semipermanentes, 11 hospitales clandestinos y sus fuerzas fueron reducidas a un 5 por ciento, lo que indica que unos 50 ó 100 guerrilleros son los que actualmente realizan acciones esporádicas de sabotaje en la

zona." Otros voceros castrenses aseguraron que la Operación Fénix habría permitido "limpiar" de reductos rebeldes un área de entre 500 y 550 kilómetros cuadrados.

En contraste con la información proporcionada por el coronel Hernández, la noche anterior y a escasos 5 kilómetros del lugar donde éste hizo sus declaraciones, columnas guerrilleras se enfrentaron a unidades del ejército, causando a éstas una baja según lo reconocieron las mismas fuentes castrenses. El mismo día, otras unidades guerrilleras tendieron una emboscada a efectivos de la Policía Nacional en las afueras de Suchitoto (Cuscatlán), ciudad comprendida en el área de operaciones. Según fuentes oficiales, los efectivos gubernamentales sufrieron en la acción 2 muertos y un herido. Cuatro días más tarde, unidades del FMLN volvieron a atacar el puesto de dicho cuerpo de seguridad en la misma localidad. El mismo día, un camión de la primera brigada fue emboscado a la entrada de Nejapa, en el norte de San Salvador, con saldo de 5 soldados heridos.

En el oriente del país, el FMLN desarrolló una actividad igualmente intensa. El 16 de marzo, una columna guerrillera se tomó la población de Alegría (Usulután), donde destruyó los locales de ANTEL y de la alcaldía, así como un transformador de energía eléctrica. Un día después, unidades del FMLN derribaron en Mercedes Umaña 3 torres del tendido eléctrico primario y 3 postes de la red secundaria, dejando sin energía a amplios sectores de la zona. Dos días más tarde, otra unidad rebelde destruyó parcialmente una máquina de ferrocarril y dos de sus vagones en las cercanías de El Tránsito (San Miguel). El 18, una columna guerrillera atacó posiciones del ejército ubicadas en San Nicolás Lempa (San Vicente). Radio Venceremos aseguró que, como saldo del ataque, el FMLN causó al ejército 17 muertos y 13 heridos y la incautó 4 fusiles M-16, un lanzacohetes M-72, una ametralladora M-60 con 400 cartuchos y abundantes pertrechos militares. El 22, el FMLN atacó posiciones de la Quinta Brigada de Infantería y de la defensa civil ubicadas en la población de San Cayetano Istepeque (San Vicente), a cuyos efectivos causó bajas, según Venceremos. Asimismo, los rebeldes volaron varios transformadores de energía y secuestraron al alcalde de la localidad, Alonso García (PDC). El 24, unidades del FMLN atacaron posiciones militares en la ciudad de Zacatecoluca (La Paz); el mismo día, en Usulután, otras unidades rebeldes emboscaron varios vehículos del batallón Atonal, causándole 22 bajas. Un día después, en San Salvador, comandos urbanos emboscaron una radiopatrulla de la

Policía Nacional, quedando 2 efectivos muertos y 3 heridos.

Como culminación de esta intensa actividad militar, en la madrugada del 31 de marzo, el FMLN dirigió un ataque de gran envergadura contra las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso (Chalatenango). La operación guerrillera, centrada en la destrucción de dicha guarnición, estuvo acompañada de acciones de menor envergadura contra tropas localizadas en el Cerro La Campana, en Suchitoto (Cuscatlán), y contra retenes del Destacamento Militar Número Uno, en las cercanías del puente Colima (Chalatenango) y en otros sectores circunvecinos al cuartel de El Paraíso. Según Radio Venceremos, la operación se efectuó en honor de los comandantes "Ruth, Susana y Roberto," y marcó el inicio de una campaña militar guerrillera denominada "Por la conquista de la paz, pan, justicia, trabajo y libertad."

Según fuentes oficiales, en el ataque habrían participado unos 800 guerrilleros, armados de ametralladoras, morteros de 81 milímetros y cañones de 105 milímetros. El FMLN admitió haber utilizado fusiles automáticos, morteros y lanzacohetes. En su informe preliminar sobre las bajas sufridas, la Fuerza Armada reconoció 69 efectivos muertos, entre ellos un asesor norteamericano, y un centenar de heridos. El comandante de la guarnición, coronel Gilberto Rubio, informó que en el interior de las instalaciones se habían encontrado los cadáveres de 8 guerrilleros infiltrados entre la tropa. Asimismo, el ataque dejó destruidas en su casi totalidad las instalaciones militares de la brigada, especialmente los galerones de la tropa, talleres, depósitos de municiones y vehículos militares. La comandancia general del FMLN informó que "entre 160 y 190 armas quedaron destruidas, además de dos obuses de 105 milímetros y una ametralladora punto 50... se destruyó todo el equipo de comunicaciones y se ocasionó un total de 650 bajas en el interior del cuartel." Al incluir las bajas ocasionadas a los retenes que circundaban la guarnición, el total de bajas ascendía, según el FMLN, a unas 700.

La destrucción casi total de la guarnición—destruida por primera vez en un ataque de similares proporciones el 31 de diciembre de 1983—rebajó relativamente las apreciaciones optimistas que en los días anteriores habían vertido diversos jefes militares en relación a la marcha de la guerra. El coronel Rubio declaró que "fue un golpe minuciosamente ejecutado, tomando tiempo para todos los detalles," mientras que el general Blandón admitió que "el ata-

que fue muy impresionante." Por su parte, el ministro de defensa puntualizó, con cierto sesgo pragmático, que "ataques como éste no es el primero y es de esperarse que tampoco será el último."

Este contexto de violencia y de recrudescimiento de la guerra acaparó una vez más la atención de los organismos internacionales de derechos humanos. En particular, el 11 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su 43º período de sesiones, aprobó su sexta resolución sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, a partir del informe rendido por el relator especial, Pastor Ridruejo. Aun cuando el gobierno salvadoreño manipuló arbitrariamente los puntos de la resolución que le eran más favorables, el documento de la comisión coincidió en sus puntos fundamentales con la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1986, expresando nuevamente su "profunda preocupación por el hecho de que siga habiendo en El Salvador graves y numerosas violaciones de los derechos humanos" y exhortando a las partes en conflicto a reanudar el proceso de diálogo como "el mejor camino para alcanzar la reconciliación nacional."

Otro aspecto de la problemática de los derechos humanos que cobró especial realce durante el mes de marzo lo constituyó el problema de los salvadoreños ilegales residentes en Estados Unidos. Según el embajador Corr, el número de salvadoreños residentes en dicho país ascendía a unos 750 mil, de los cuales unos 400 mil eran ilegales. Corr calculó entre 350 y 600 millones de dólares la ayuda enviada por dichos salvadoreños a sus familiares en El Salvador. Aunque un poco tardíamente, el gobierno salvadoreño reaccionó a las amenazas de que la ley de inmigración Simpson-Radino provocara la deportación masiva de salvadoreños. El canciller Acevedo Peralta viajó a Washington para entrevistarse con el subsecretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Elliot Abrams, y con otros funcionarios. El canciller no consiguió el trato preferencial que buscaba para los salvadoreños ilegales. El 28, salió una comisión de la asamblea legislativa, integrada por 2 diputados del PDC y 2 del PCN, para abogar por los refugiados salvadoreños ante miembros del congreso y otros sectores políticos norteamericanos. Los resultados de las gestiones de la comisión fueron tan magros como los del canciller.

En el ámbito regional, la dinámica del proceso giró en torno a los esfuerzos de Reagan por recuperar su imagen después de conocido el escándalo Irán-contras, a la profundización de la

crisis interna entre los diversos grupos antisandinistas, y a las primeras reacciones suscitadas por la propuesta de paz para Centroamérica formulada por el presidente costarricense.

El 5 de marzo, el presidente Reagan dirigió a toda la nación un discurso en el cual intentó responder a las revelaciones del Informe Tower, reconociendo que "lo que empezó como una iniciativa estratégica se transformó en un intercambio de armas por rehenes, volando así mis convicciones, la política del gobierno y la estrategia original que tenía en mente. Hay razones por las que eso ocurrió, pero no hay excusas." Ese reconocimiento de su responsabilidad en el escándalo, sin embargo, no le impidió, al día siguiente de su discurso, solicitar al congreso la aprobación para entregar a "los contras" los últimos 40 millones de dólares asignados para 1987.

No obstante, los esfuerzos de Reagan por financiar las actividades de "los contras" se vieron poco favorecidos por la profundización de las disputas por la hegemonía del movimiento antisandinista, sobre todo por la renuncia de Arturo Cruz al directorio de la Unidad Nicaragüense Opositora (UNO). Desde hacía varias semanas, Cruz había manifestado su descontento por la hegemonía que la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), dominada por el coronel Enrique Bermúdez, ex-miembro de la Guardia Nacional de Somoza, ejercía sobre la UNO. En la carta de renuncia, difundida el 9 de marzo, Cruz deploraba que "la UNO abandonó su estructura pluralista para convertirse en una camarilla excluyente."

La propuesta de paz del presidente Arias se fue constituyendo en otro elemento que, a despecho del plegamiento de Costa Rica a las directrices norteamericanas en los años anteriores, empezó a generar algunos sinsabores a la Casa Blanca. En el marco de la propuesta, el gobierno costarricense emitió el 8 de marzo un comunicado en el cual advertía a los antisandinistas que "suspenderá su asilo político y deberán abandonar de inmediato el país si celebran actividades que violen las leyes de Costa Rica y sus esfuerzos de paz." El 16, el canciller Rodrigo Madrigal envió al Secretario de Estado norteamericano George Shultz una nota diplo-

mática en la cual reiteraba la neutralidad de Costa Rica en el conflicto centroamericano y subrayaba que su gobierno "no aceptará más sugerencias e instancias como las que le fueron comunicadas en el pasado y aun reiteradas recientemente, para ayudar a los rebeldes nicaragüenses."

Paulatinamente, la propuesta de Arias empezó a beneficiarse del apoyo brindado a Contadora por la comunidad internacional. El 12 de marzo, reunidos en Montevideo, los grupos de Contadora y de Apoyo acordaron apoyar dicha iniciativa. El canciller uruguayo subrayó que ésta podía propiciar "el principio de un nuevo proceso negociador que lleve a la solución del problema centroamericano." En una línea convergente de apoyo a la pacificación regional, los Países No Alineados formularon el 13 un "llamado urgente a la paz en Centroamérica y reiteraron su respaldo a "la gestión pacificadora del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo."

En la misma medida en que la propuesta costarricense empezaba a ganar el consenso de los países más críticos de la salida militar a la crisis centroamericana, Estados Unidos incrementó sus recelos sobre la iniciativa de Arias, particularmente en relación a las propuestas de amnistía general, de cese al fuego en la región y de suspensión de la ayuda militar extranjera a los grupos irregulares que intentaban desestabilizar algún Estado del área. Con el mismo hermetismo de sus viajes anteriores, entre el 23 y 27 de marzo, el embajador itinerante de Estados Unidos para la región, Philip Habib, efectuó una nueva gira que lo llevó por Honduras, Costa Rica, Colombia, Panamá y México. En Panamá, Habib evadió comentar sobre la propuesta de Arias arguyendo que Estados Unidos esperaría "hasta que los centroamericanos hagan sus propias recomendaciones al plan." Sin embargo, el canciller hondureño, Carlos López Contreras, indicó que, a su paso por Honduras, Habib formuló recomendaciones muy concretas a la propuesta. Aunque no especificó en qué consistían estas recomendaciones, López Contreras puntualizó que se inscribían "dentro del arreglo general que Estados Unidos quiere en la región."